

LA DEFENSA DE LA DEFENSA.

Por Débora Guaymas y Catalina Cámpora. Colegio de Abogados de San Nicolas

Sumario: Honorarios Mínimos: Alimento y dignidad humana. Interpretación de las normas. Orden público. Problemática de la Caja.

I.-Introducción

Quienes nos abocamos a la tarea de abogar por los derechos de los demás estamos en peligro, y hoy nos toca la difícil tarea de encarar la defensa de la causa propia, la de defender nuestra dignidad, nuestro trabajo, nuestro salario, nuestro alimento.

Cada día es más habitual, al límite que muchas veces lo hemos normalizado, que al momento de ser regulados los honorarios por la actuación profesional en la defensa de un tercero, los mismos resultan cada vez más bajos, cada vez alcanzan menos, cada vez se sobrepasa un nuevo límite.

En primer lugar debemos situarnos en el plano legislativo, teniendo en vista cuales son las normas que regulan el ejercicio profesional, y la valoración de los trabajos desplegados por los abogados. Lo primero que se plantea en nuestra consideración, son la Ley Nacional 27.423 de ejercicio de la abogacía, y la Ley Provincial 14.967 de honorarios; sin embargo no debemos limitarnos solo a ellas, sino abarcar la inmensidad del sistema normativo en que se ven inmersas y con el que convergen, como como ejemplo el Código Civil y Comercial, de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Ley de Contrato de Trabajo.

En segundo término, podemos distinguir diferentes ámbitos sociales que se ven afectados por las regulaciones de honorarios por debajo de los mínimos arancelarios. Si bien en un primer momento se podrá pensar que el afectado es el abogado involucrado en la causa, lo cual es innegable, si nos detenemos un momento podemos observar que la problemática es aún mayor a la esfera personal, que la trasciende a tal punto que afecta a la abogacía en su conjunto, y en última instancia a la sociedad misma.

En concreto, esta problemática la podemos sistematizar de la siguiente manera:

1. Afectación al letrado interviniente: Los honorarios como alimento, salario y realizadores de la dignidad humana. Principios de interpretación de la ley. El orden público.

2. Afección a la abogacía en su conjunto: Respeto a la dignidad profesional y desfinanciamiento de las cajas

3. Afección a la sociedad: Deber de tomar más causas para poder cubrir un ingreso mínimo descuidando las mismas. Rechazo de causas de baja cuantía, y en consecuencia el desamparo de los justiciables.

En suma, consideramos esencial la necesidad de empezar a desarrollar acciones concretas en pos de la defensa de nuestro derecho a la percepción de honorarios dignos, no solo de forma aislada, sino también desde el colectivo que conformamos, en defensa tanto de la dignidad de cada uno, y de toda la abogacía.

Para ello es que nos abocaremos a analizar pormenorizadamente cada uno de los actores afectados en forma individual, identificando las problemáticas que particularmente los aquejan, e intentaremos dar herramientas que puedan ayudar a sortear esas dificultades.

II.- Afección a los letrados en forma individual

Afirma Fayt que el abogado es un elemento integrante de la organización judicial, una magistratura al servicio de la República Democrática que ejerce una función necesaria para el Estado, que ha sido definido, con razón, como órgano intermedio entre el juez y la parte en la cual el interés privado de alcanzar una sentencia favorable se concilia con el interés público de alcanzar una sentencia justa. De tal manera que ambos, el juez y el abogado, actúan como servidores del derecho.

El carácter público de la abogacía explica la potestad estatal de exigir el patrocinio profesional de toda controversia o proceso judicial y el consecuente control de la matrícula y de los requisitos éticos inherentes al ejercicio de la profesión¹.

Carácter alimentario.

Los honorarios profesionales son un aspecto fundamental en la relación entre el abogado y su labor. En este sentido, resulta indiscutible que estos representan no solo una contraprestación por los servicios prestados, sino también un medio esencial para la subsistencia del profesional y su familia.

Podemos observar que el carácter alimentario de estos se encuentra ampliamente protegido principalmente por la CN, y tratados Internacionales, en el ámbito Nacional Ley 27.423 (art1), Provincial Ley 14.967(art 1).

La equiparación del abogado con el trabajador, y por ende su derecho a la protección que establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, es crucial. Este artículo consagra el principio de que "*El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes (...)*", lo que otorga a

¹ ver cuando seas abogado de Carlos Fayt, Editorial Universitaria La Plata, pag.25 año 1995.

los abogados un estatus de preferente tutela constitucional. Este marco legal refuerza la idea de que los honorarios son de carácter alimentario, pues su fin último es servir como sustento.

El artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la República Argentina, refuerza este carácter alimentario. Este artículo establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, señalando que cualquier restricción debe armonizar el derecho a la propiedad con el interés social. Así, los honorarios del abogado, en su naturaleza alimentaria, deben ser garantizados y protegidos.

El crédito por honorarios se encuentra amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo personal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha abordado este tema en múltiples fallos, destacando que los honorarios deben ser considerados de carácter alimentario. Esta caracterización no sólo es teórica, sino que se ha reflejado en decisiones judiciales que enfatizan la importancia de asegurar que los abogados reciban una retribución justa por su labor.

La jurisprudencia ha sido clara en el reconocimiento de este carácter alimentario. En el fallo "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Pérez, Jesús Alfredo s/ Sumario" (C. 087751, 20/11/90), se reafirma que los honorarios profesionales son esenciales para la subsistencia del abogado.

La naturaleza alimentaria de los honorarios se asemeja al sueldo o salario que percibe un trabajador en relación de dependencia. Como bien señala la Cámara Civil y Comercial de Mendoza en el caso "Fernández, Viviana Marcela y otros c/ AGP Allianz Argentina Cía. de Seg. Grales. SA", los honorarios representan el fruto del trabajo del abogado, reafirmando su carácter netamente alimentario.

El carácter alimentario de los honorarios profesionales de los abogados es un principio reconocido y protegido por el marco constitucional y legal. La labor del abogado no solo debe ser valorada en términos de su capacidad técnica, sino también en función de su rol como proveedor y sustento para su familia. La adecuada retribución por su trabajo no solo es un derecho, sino una necesidad que debe ser garantizada en todo momento.

Además, así como los magistrados y funcionarios reclaman por la actualización y mejora de sus haberes, como una forma de conservar el poder adquisitivo, alegando que su actualización hace a la intangibilidad de las mismas como forma de garantizar la independencia del Poder Judicial. El mismo razonamiento cabe efectuar sobre la importancia y necesidad del acatamiento de la ley, al momento de regular los honorarios: respetando los mínimos legales, valorizando el trabajo profesional y disponiendo la actualización de las bases reguladoras, de modo que se evite la licuación de su poder

adquisitivo, ya que la pérdida de valor afecta la dignidad del ejercicio profesional y deteriora la calidad de la Justicia.²

Dignidad Humana

El cobro de los honorarios profesionales no solo representa una necesidad económica para los abogados, sino que también está intrínsecamente ligado a la dignidad humana. Este aspecto se refuerza con la protección que brinda el marco internacional de derechos humanos, así como su carácter de derecho privado.

La dignidad humana es un principio fundamental que debe ser respetado en todos los ámbitos de la vida, incluida la profesión legal. El cobro de los honorarios es esencial para garantizar que el abogado pueda sostener su vida y la de su familia, asegurando así su dignidad. Al no recibir una retribución justa, el letrado puede verse en situaciones de precariedad económica que vulneren su dignidad.

El Sistema Internacional de Derechos Humanos, a través de diversos tratados y convenios, reconoce la importancia de la remuneración adecuada por el trabajo. Documentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establecen el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, que incluyen una remuneración equitativa. Particularmente el artículo 7 del citado cuerpo legal establece: *“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:*
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.” -El resaltado nos pertenece-

Esta protección se extiende a todos los profesionales liberales, incluidos los abogados, quienes, al ejercer su profesión, tienen derecho a recibir honorarios que reflejen la calidad y el esfuerzo de su trabajo.

Además de su relación con la dignidad humana y los derechos humanos, el cobro de honorarios profesionales se enmarca dentro del derecho privado. Esto implica que tenemos la

² “JUECES Y JUEZAS RESPETEN LOS HONORARIOS” ColProBa
<https://colproba.org.ar/1/2022/10/03/jueces-y-juezas-respeten-la-ley-de-honorarios/>

legitimidad para acordar con nuestros clientes los términos de nuestra remuneración, respetando siempre las normativas y principios éticos que rigen la profesión. Este carácter privado permite una flexibilidad en la forma en que se establecen y cobran los mismos, siempre que se mantenga un principio de congruencia entre equidad y justicia.

La jurisprudencia también ha jugado un papel importante en la defensa del derecho a la percepción de honorarios. Los tribunales han sostenido que el incumplimiento en el pago de honorarios puede constituir una violación del derecho a la justa retribución, alineándose así con el principio de dignidad humana y el respeto por el trabajo del abogado.

El cobro de los honorarios profesionales no es un mero aspecto administrativo, sino una faceta esencial de la dignidad humana y un derecho protegido a nivel internacional. La interrelación entre la dignidad, los derechos humanos y el derecho privado subraya la importancia de garantizar que los abogados recibamos una compensación justa por nuestro trabajo. Esta protección no solo beneficia al profesional, sino que también enriquece el sistema jurídico en su conjunto, al asegurar que los letrados podamos ejercer nuestra labor con la dignidad y el respeto que merecemos.

Interpretación de la Ley:

Antiguamente, siguiendo lo que establecía el viejo art. 16 del Código Velezano, la interpretación de las normas debían realizarse siguiendo un orden jerárquico, verticalista, primando la letra de la ley, luego el espíritu de la norma, y finalmente por los principios generales del derecho.

En la actualidad, el Código Civil y Comercial marca en el art. 2 una forma horizontalista de interpretación, donde los criterios no tienen un orden exacto de aplicación, sino que enuncia normas cardinales que el operador debe utilizar para desarmar el sentido de la norma. Dicho ello, cuando estamos frente a normas de orden público es claro que debemos atenernos a criterios objetivos; o si nos ubicamos en regímenes tutelares especiales deberá primar la interpretación pro consumidor, pro operario, como ejemplos claros de nuestro ordenamiento³.

Sentado lo anterior, cuando hablamos de honorarios, la ley 14.967 establece en su art. 1 expresamente que la misma es de orden público. Asimismo, cuando determina que los honorarios profesionales deben considerarse como remuneraciones por trabajo y limitan su embargabilidad, es la misma norma quien equipara a los emolumentos con el alimento.

En consecuencia, tanto desde una pauta objetiva, como desde la óptica subjetiva, la interpretación del art 22 de la mencionada ley, surge a todas luces que los honorarios mínimos deben ser respetados, jerarquizados, y por derivación cualquier apartamiento debe ser necesariamente justificado. Es decir, requiere cuanto menos la declaración de inconstitucionalidad del artículo. Si

³ MARIO ODERIGO en "Derecho Procesal Penal", Ediciones Depalma, 1975

queremos ir más allá, la equiparación con el alimento le da a este derecho reconocido en favor de los abogados liberales jerarquía constitucional.

Cualquier apartamiento de los magistrados a las normas de orden público, no solo implica un incumplimiento grave a sus deberes, sino también que genera un quebrantamiento a todo nuestro ordenamiento jurídico. Como consecuencia, nos obliga que el cuestionamiento constitucional sea de última ratio.

En este orden de ideas, no podemos obviar el deber de los magistrados consagrado en el art. 15 de la ley 14.967 el cual determina en un primer momento la obligación de fundar las regulaciones de honorarios. Sin embargo, si continuamos leyendo el texto de la ley, nos encontramos con fuertes limitaciones que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. Ello, se contradice con lo establecido en el art. 22 del mismo cuerpo legal, y ante la colisión de dos estipulaciones que refieren al derecho constitucional del alimento de los profesionales, no caben dudas que la estipulación que fija un mínimo de honorarios debe prevalecer. Siempre que esté en juego el alimento de una persona, y por derivación su propia subsistencia, se convierte en un sujeto de preferente tutela.

Además, y máxime teniendo en cuenta el esquema judicial y legal actual por el cual tenemos por ejemplo en materia laboral un sistema de doble instancia pero cuyas cámaras de apelación aún no fueron creadas, la prohibición de cuestionar las regulaciones emitidas impide a los patrocinantes el acceso a una defensa justa socavando la confianza en el sistema legal. La aplicación irrestricta del art. 57 de la ley arancelaria, veda al profesional del derecho a la doble instancia, a la revisión de la decisión de los magistrados, y cuando las regulaciones que se emiten perforan los mínimos legales, los abogados nos encontramos impotentes e indefensos frente al avasallamiento de nuestros derechos.

Finalmente, no podemos obviar que la decisión que adopten los magistrados en colisión con el texto de una ley sancionada por la legislatura provincial, es una intromisión en un área diferente del Estado, atenta contra el republicanismo que estableció el constituyente. Como profesionales del derecho, y como parte de la ciudadanía, ello no puede ser tolerado. Tal es la gravedad en el apartamiento de la norma de orden público que el mismo legislador ha ratificado su postura estableciendo en el art. 16 del mismo cuerpo legal que cuando los mínimos allí establecidos no sean respetados, harán incurrir al juez en causal de mal desempeño y consecuentemente enjuiciamiento.

Esto último, y en defensa de sus derechos, los mismos magistrados han establecido que afecta la independencia del poder judicial, particularmente cuando fue cuestionado por el Colproba en la causa “Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ recurso de inconstitucionalidad en expte 492/18 seguido a Lopez Mauro Jaime Oscar y Sosa Aubone Ricardo Daniel”. Es evidente que solo protegen sus intereses personales. y no los del Estado de derecho.

III.- Afección a la abogacía en su conjunto: La problemática del desfinanciamiento de la caja.

La abogacía ha construido a lo largo de los años un sistema solidario de la Seguridad Social a través de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, organismo que recibe un porcentaje de los honorarios de cada profesional (de un 15 o 20% dependiendo la naturaleza del caso), y lo redistribuye en jubilaciones, pensiones, asignaciones y beneficios a los matriculados.

Para que este organismo pueda cumplir con sus fines, anualmente se realizan cálculos actuariales que determinan el monto mínimo que obligatoriamente cada abogado debe completar. Estos aportes se integran con los porcentajes antes mencionados, y cuando la suma resultante deviene insuficiente, debe cubrirlos el profesional con sus emolumentos, lo que significa pérdidas económicas muy significativas. A modo de ejemplo, este año -2024- el monto mínimo que se debe aportar es de \$1.530.000.

Parte de ese cálculo actuarial, es la expectativa de la Caja de recibir aportes al menos por el mínimo de ley. En efecto, cuando estos son perforados, en lugar de recibir lo proyectado, el aporte se vuelve significativamente inferior. Frente a ello, cada vez hay más profesionales que se ven obligados a abonar de sus cuentas personales montos superiores, a trabajar en un número de causas que escapan a su control y capacidad operativa, o incluso a elegir qué causas tomar, y cuales rechazar, prefiriendo aquellas de mayor cuantía que mejor le ayuden a completar su cuenta de aportes, o lo que es aún más lamentable, viéndose obligado a adherir a regímenes de estamentos inferiores ante la imposibilidad de cubrir el 100% de la cuota anual obligatoria -CAO- lo que deviene en menor liquidez de la Caja para afrontar los haberes de los pasivos, y en una disminución de los beneficios de ese profesional.

Esta problemática es una parte esencial del hecho que hoy un abogado jubilado en nuestra provincia perciba haberes mensuales de \$550.000, suma que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, cuando durante toda su actividad aportó de forma regular a un sistema que hoy no da a basto.

Permitiendo estos atropellos a nuestros derechos, no solo perdemos en términos de ingresos personales, sino que además estamos desfinanciando nuestra caja de previsión social. Excede lo estrictamente profesional y nos afecta de forma colectiva.

Esta situación no es exclusiva de nuestra provincia; a modo de ejemplo podemos observar que la vecina provincia de Santa Fe sufrió una situación similar. Sin embargo, logró saltar esa problemática mediante acciones concretas, educando, fomentando la defensa del honorario y del aporte, demandando a los profesionales la integración de los porcentajes que se deben por cada regulación. Hoy en día, los magistrados y funcionarios del poder judicial son guardianes de todo el sistema, y respetan las regulaciones mínimas establecidas en la ley de honorarios, y exigen el

cumplimiento de los aportes, y en aquellas situaciones en las que el profesional, por medio de un acuerdo con la contraparte, o por tener un convenio de honorarios particular con su cliente acepte el no pago o sumas inferiores, dentro de los expedientes se regulan igualmente honorarios conforme la norma arancelaria, aclarando que es a los solos fines de determinar el valor que corresponde a las Cajas.

Un ejemplo de ello es la homologación de un acuerdo en sede laboral de la ciudad de Villa Constitución en el que se estableció: *“Que si bien a los profesionales les asiste el derecho de convenir sus honorarios (cf. arts. 6 y 9 de la Ley 11.089), se advierte que el monto arribado se encuentra por debajo del mínimo de las escalas previstas en los arts. 6 y 8 de la Ley 6767. Va de suyo que ello afecta los intereses de la Caja de Seguridad Social y Caja Forense. En ese orden, sin perjuicio de lo acordado, corresponde efectuar una regulación al solo efecto de determinar el monto sobre el cual corresponderá aportar. Que el Art. 19 1º párrafo CPL dispone que “Ninguna norma arancelaria o impositiva podrá suspender o condicionar el dictado de sentencia definitiva o de auto con fuerza de tal”. Sin perjuicio de lo expuesto, y de acuerdo al 2º párrafo del mencionado Art. 19, constan liquidados por la Actuaría los sellados que resultan exigibles.”*⁴

De este ejemplo podemos extraer dos conclusiones primordiales. En primer lugar la responsabilidad del profesional en la estipulación de sus honorarios, en la valoración del propio labor, con la facultad de aceptar montos inferiores corriendo a su propio riesgo, pero no siendo ello nunca una obligación; y en segundo lugar la vital importancia que tiene la ley arancelaria para el funcionamiento de las Cajas, y la estrecha relación que tiene ello con los honorarios mínimos.

Asimismo, luego de una regulación de honorarios, en cualquier instancia del proceso, se corre automáticamente vista a la Caja, la cual tiene la obligación de ingresar al sistema virtual, ver el desarrollo del expediente, acceder a la regulación y manifestar sobre la concordancia de ella con la ley arancelaria. Hay una actitud activa institucional que vela por un lado por los honorarios mínimos, y por el otro, por el correcto funcionamiento de todo el sistema solidario garantizado con los aportes mínimos de cada proceso judicial y/o administrativo. No lo mencionamos previamente, pero toman también intervención sobre las actuaciones ante las Comisiones Médicas.

Con actitudes y decisiones como las adoptadas por la colegiación en la provincia de Santa Fe, resaltamos lo esencial y necesaria que resulta la actitud activa de la Caja profesional, la intervención en los procesos y la defensa colectiva de los abogados. No perdamos de vista que el objeto de nuestra Caja es la de realizar un sistema de asistencia y previsión fundado en los principios

⁴ MORALES VICTOR HUGO C/ NOR-CAN SRL S/ PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS EN GENERAL CUIJ 21-27297552-0 Radicado en: Juzgado Laboral de Villa Constitución SEC. ÚNICA

de solidaridad para los letrados, jubilados y sus causahabientes, solventado por los aportes de los abogados activos.

Por último, cabe destacar que la Caja debe recibir mensualmente el listado de las regulaciones emitidas. Sin embargo, en la actualidad desconocemos si tales listados son enviados por los juzgados, tribunales y Cámaras, ni si ellos son exigidos por la Caja, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la ley 6716⁵. Suponiendo que esta carga es cumplida, el mero anoticiamiento no genera efecto alguno, ni genera a la Caja obligación de pronunciarse. Es por ello que consideramos que una solución superadora es el cambio de los listados o planillas por una vista dentro de cada expediente, que derive en la obligación de pronunciamiento, y otorgue el derecho a interponer recursos en pos de la defensa de su propio patrimonio.

VI.- Afectación de la ciudadanía: análisis económico de los casos, acceso a la justicia.

En el ejercicio de la profesión, nos enfrentamos a una serie de dilemas éticos y económicos que pueden influir en su decisión de aceptar ciertos casos. Uno de estos, se presenta al considerar causas de baja cuantía, donde los honorarios potenciales son limitados en comparación con el tiempo y esfuerzo que se requieren. Esta situación no solo impacta en la viabilidad económica del ejercicio de la abogacía, sino que también plantea serias preguntas sobre la defensa de los justiciables y el acceso a la justicia.

Este último, es un derecho esencial que debe ser garantizado para todos los ciudadanos. La actuación del abogado es vital en cualquier tipo de proceso, ya que no solo proporciona representación legal, sino que también actúa como un puente entre el sistema judicial y aquellos que buscan justicia.

Por otro lado, haciendo puntualmente hincapié en el abogado independiente, y más aún en el novel/joven profesional, debemos tener en cuenta que se afrontan costos operativos significativos, que incluyen alquiler de oficina, personal, inscripciones profesionales, pago de servicios, adquisición y mantenimiento del equipamiento, el pago de CAO, y otros gastos generales. Adviértase que sólo mencionamos gastos que hacen el ejercicio mismo, y no nos hemos adentrado en el ámbito personal, en su alimento, vivienda, vestimenta, esparcimiento, etc.

Ante esta realidad, la decisión de no tomar casos de baja cuantía, resulta ser normalmente una estrategia racional desde el punto de vista financiero. La dedicación de tiempo y recursos a un

⁵ Ley 6716, ARTICULO 23°: (Texto Ley 10.268) Los Jueces y Tribunales de todos los Fueros deberán remitir mensualmente a la Caja, bajo responsabilidad de lo dispuesto en el artículo 16, una planilla con indicación de las causas en que se haya practicado regulación de honorarios a los afiliados intervinientes, consignando el número del expediente, denominación de la carátula, fecha de la resolución, monto regulado, profesional beneficiario, su inscripción en la matrícula y número de afiliación a la Caja. A este último efecto los afiliados están obligados a consignarlo en toda actuación en la que intervengan.

caso que, en última instancia, podría no resultar en un ingreso suficiente, puede poner en riesgo la estabilidad económica del profesional.

Esta problemática se agrava como consecuencia de las regulaciones por debajo del mínimo establecido por ley o donde la compensación es contingente al éxito del caso. Esto implica que nos veamos forzados a priorizar casos de mayor cuantía para mantener nuestra viabilidad financiera, lo que limita la representación de aquellos que más lo necesitan.

V.- Impacto en la Defensa de los Justiciables

La negativa a tomar causas de baja cuantía que antes mencionamos, tiene repercusiones directas en el acceso a la justicia. Muchos justiciables, especialmente en comunidades vulnerables, se ven desamparados ante la falta de representación legal. Esta situación crea un vacío en el sistema, donde los que tienen recursos pueden acceder a la justicia, mientras que los que no pueden pagar honorarios altos quedan sin voz ni defensa.

La falta de abogados dispuestos a asumir estos casos puede resultar en:

1. **Desigualdad en el Sistema Judicial:** Las personas de menores recursos no pueden acceder a la representación legal necesaria para hacer valer sus derechos, perpetuando un ciclo de desigualdad.
2. **Injusticias Procesales:** Sin una defensa adecuada, los justiciables en causas de baja cuantía pueden enfrentar decisiones judiciales desfavorables, lo que compromete la integridad del sistema.
3. **Desconfianza en el Sistema Legal:** La percepción de que solo los casos de mayor cuantía son valorados puede erosionar la confianza de la ciudadanía en la justicia, llevando a una menor participación en el sistema legal.

La decisión de no aceptar causas de baja cuantía presenta una gran disyuntiva para los profesionales, al confrontar las necesidades económicas con el imperativo ético de garantizar el acceso a la justicia. Para lograr una sociedad más equitativa, es fundamental seguir trabajando en la eliminación de las barreras que impiden el acceso a la justicia, asegurando que nadie sea desamparado frente a la ley.

Abordar esta problemática, requiere un enfoque multifacético, donde tanto los profesionales del derecho como las instituciones que los nucleamos trabajemos juntos para asegurar que todos,

independientemente de su situación económica, tengan la oportunidad de defender sus derechos. Solo así podremos construir un sistema judicial que refleje los principios de igualdad, justicia y respeto por los derechos humanos

VI.- Conclusión

Hemos analizado las problemáticas relacionadas con la regulación de honorarios en el ejercicio profesional, destacando la falta de transparencia y el incumplimiento de las normativas vigentes. Hemos visto la forma en que ello afecta no solo al profesional en favor de quien se regulan honorarios muy por debajo de los mínimos de ley, sino también cómo esto afecta al sistema de justicia en su conjunto, a la ciudadanía por la que deberíamos velar, y el fuerte impacto que tiene sobre la solvencia y funcionamiento de la Caja de Seguridad Social.

Este trabajo ha evidenciado cómo la regulación de honorarios mínimos no solo es esencial para garantizar la subsistencia de los profesionales del derecho, sino también para asegurar un sistema de justicia equitativo y accesible para todos los ciudadanos.

La defensa de la dignidad y los derechos de los profesionales en relación con sus honorarios es una cuestión crítica que trasciende el ámbito personal para afectar a toda la colegiación y, por derivación, a la sociedad.

La interpretación de las normas que rigen los honorarios debe ser clara y rigurosa, reconociendo su carácter alimentario y su función esencial en el mantenimiento de la dignidad humana. El incumplimiento de estas regulaciones no solo atenta contra la economía del letrado, sino que también compromete la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos de los justiciables, especialmente aquellos en situaciones vulnerables.

Además, el desfinanciamiento de las cajas de previsión social pone de relieve la necesidad de un compromiso colectivo por parte de los abogados y las instituciones del sistema judicial para abogar por el respeto de los honorarios mínimos. Esto no solo fortalecerá la profesión, sino que también garantizará un acceso más justo a la justicia.

En síntesis, es fundamental que la abogacía en su conjunto, promueva medidas de acción positiva en pos de la defensa de sus derechos e impulsar la promoción de un marco legal que respete la dignidad de su trabajo. Solo a través de un esfuerzo conjunto y un compromiso constante podremos construir un sistema jurídico que garantice la equidad, la justicia y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.

VII.- Propuestas

1. Creación de observatorios de honorarios en el marco de los Colegios de Abogados de cada departamento judicial.
2. La recolección de datos estadísticos de los diferentes Colegios por parte del Colproba.
3. Que se corra vista de forma automática mediante el SNyPE de cada regulación, a la Caja de Previsión Social de la Pcia de Buenos Aires.